

C.A. de Santiago

Santiago, dieciocho de abril de dos mil veintidós.

**Vistos:**

En la causa RIT O-51-2020 del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia definitiva de dieciocho de febrero del año en curso, se condenó al imputado Felipe Hernán Leyton Muñoz a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales correspondientes, sin costas, como autor del delito de lesiones graves causadas a un funcionario de carabineros en el ejercicio de su funciones, en grado consumado, cometido en la comuna de Peñalolén el 2 de junio de 2019.

La sentencia dispone, además, que el sentenciado deberá cumplir de manera efectiva la sanción corporal impuesta, la que se le contará desde el 16 de diciembre de 2021, fecha desde la cual se encuentra con prisión preventiva en esta causa.

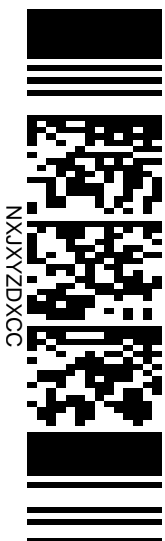
Contra esta sentencia, la defensoría penal pública, en representación del sentenciado, interpuso recurso de nulidad, procediéndose a la vista el día 29 de marzo pasado, oportunidad en que alegaron los respectivos intervinientes, esto es, defensor, fiscal y querellante institucional.

Concluida la vista, se fijó la audiencia del día de hoy para la comunicación de la sentencia.

**Considerando:**

**Primero:** Que la defensa invoca, en primer lugar, la causal prevista en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del mismo código, en lo que se refiere a que la sentencia se dictó sin la debida fundamentación

Después de referir antecedentes generales de la causa, así como reproducir el texto legal de la causal y citar jurisprudencia sobre este motivo de invalidación, enfatiza que en la especie su defendido fue acusado por el delito de maltrato a carabineros, previsto y sancionado en el artículo 416 bis N° 2 del Código de Justicia Militar, no obstante que el día de los hechos, 2 de junio de 2019, al ser atendido por el facultativo de turno del Hospital de Carabineros, las



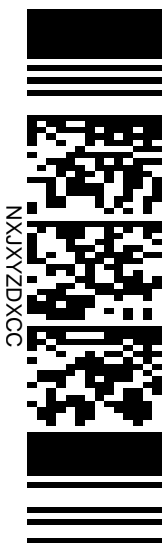
lesiones fueron diagnosticadas como menos graves. Luego, debido a una infección subsecuente, se determinó por el médico legista que la duración de las lesiones duró entre 30 y 35 días.

En seguida, reproduce el considerando séptimo del fallo, pero subraya que en dicho fundamento el Tribunal no se hace cargo de la existencia de un vínculo subjetivo entre la acción y el resultado -tipicidad subjetiva-, es decir la concurrencia de dolo o culpa/negligencia que abarcara la previsibilidad de la entidad de las lesiones, lo que en todo caso fue materia de las alegaciones de la defensa, planteando una hipótesis de preterintencionalidad, como se deja constancia en el considerando cuarto del fallo recurrido.

La omisión anotada es no solo desde el punto de vista dogmático, sino también probatoria, ya que ninguna de las probanzas se refiere al punto y el tribunal no plasma tampoco en la sentencia algún razonamiento o fundamento probatorio respecto de los elementos que darían cuenta de la concurrencia de dolo.

Luego, refiere que si bien el tribunal analiza los componentes del tipo penal en el fundamento octavo de la sentencia impugnada, el que transcribe, el Tribunal concluye que el resultado material de lesiones graves sería producto de la acción del acusado, sin especificar ni detallar algún razonamiento adicional, y que la respectiva Sala además asume como dolosa a adoptar un veredicto condenatorio.

Prosigue reiterando que en la sentencia recurrida, no se aprecia ningún razonamiento probatorio o fundamentación probatoria suficiente para desechar las alegaciones de la defensa en torno a que el dolo del imputado pudiera abarcar siquiera la posibilidad de producir un resultado lesivo equivalente al que supone la imputación objeto de la condena, las que fueron señaladas en su oportunidad en el juicio oral. Los adjudicadores no dan razón de por qué se descarta derechamente que no mediaba una previsibilidad del resultado reprochado al imputado que fuera posible y que este además fuera abarcado por el dolo del imputado a lo menos de manera eventual, no siendo por ello suficiente las meras referencias que realizan los sentenciadores al referirse a la mera causalidad –imputación



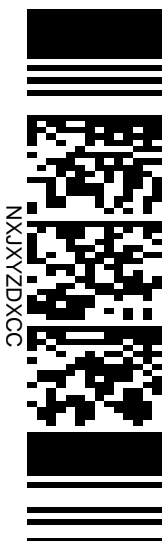
subjetiva- de la acción desplegada por Felipe Hernán Leyton Muñoz y la incapacidad para el trabajo que en definitiva se produjo para el ofendido.

Más aun cuando, de los propios razonamientos del tribunal se desprende que se trataba de una probabilidad bastante baja médicamente, como se consigna en el considerando octavo, citando a la perito legista.

A su juicio, por los argumentos vertidos, resulta ser clara la omisión en que incurre el Séptimo Tribunal de Juicio Oral, la cual no permite la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar la conclusión de que Felipe Leyton Muñoz tenga responsabilidad en los hechos que se dieron por acreditados en autos. El perjuicio, en relación a esta causal, consiste entonces en haber condenado a su representado aun cuando el tribunal no realizó una valoración de los medios de prueba en la forma requerida por el artículo 342 en relación al 297 ambos del Código Procesal Penal, ocasionándole así, un agravio que es reparable únicamente por la vía de nulidad de la sentencia y del juicio que deviene en ella.

**Segundo:** Que la causal esgrimida implica demostrar que en la sentencia se ha omitido el requisito previsto en la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, esto es la valoración de los medios de prueba que fundamentaren las conclusiones fácticas que se dieron por probadas, fueren ellos favorables o desfavorables al enjuiciado. En la especie, la defensa arguye la falta de fundamentación en lo que se refiere a una de las alegaciones vertidas por su parte en el transcurso del juicio oral, esto es la falta de tipicidad subjetiva del imputado en lo que se refiere al resultado de las lesiones producidas a la víctima.

En efecto, tal como se desprende del considerando cuarto de la sentencia, una de las alegaciones planteadas por la defensa –en la clausura- fue que *“el dolo debía abarcar también el resultado, mismo que su cliente no podía prever”*; más aún, en el alegato de apertura la defensa había esgrimido como línea argumentativa que *“la entidad final de las lesiones no se condice con las informadas en un comienzo, por lo que la acusación infringe el principio de culpabilidad,*



*ya que las lesiones en principio fueron calificadas como menos graves. Además, a su cliente no le era previsible el resultado.”*

Ahora bien, de una simple lectura de la sentencia en sus considerandos octavo a undécimo se puede advertir que efectivamente el Tribunal de Juicio Oral no se hizo cargo de esa alegación, pues si bien alude en el motivo octavo a los dichos de la perito legista sobre la magnitud de las lesiones sufridas por el policía ofendido, así como la opinión del Dr. De la Cuadra al respecto, nada indica sobre el conocimiento previo y representación que debía tener el imputado de esas lesiones, máxime si la defensa hizo hincapié en ese punto, como ya se indicó.

Luego, en el motivo undécimo, al analizar los alegatos de la defensa, la sentencia nuevamente elude considerar la correspondencia de un elemento subjetivo en el proceder del imputado con el resultado de las lesiones, y los antecedentes probatorios que sustentarían su atribución a título de delito doloso, limitándose a reiterar los dichos de la forense Patricia Angel, quien aseguró que las lesiones deben considerarse como graves. Es decir, el análisis del Tribunal apunta más bien a aspectos objetivos, como la versión de los facultativos y el certificado de atención de urgencia, pero no abarca la tipicidad subjetiva, ni menos el examen volitivo del hechor en relación a la naturaleza inicial de las lesiones.

Esta omisión sin duda influye en lo dispositivo del fallo, pues de haberse efectuado dicho análisis, aquello habría influido en lo dispositivo del fallo, sea en el carácter del delito por el cual se acusó al imputado, como también en la pena asignada por este ilícito, toda vez que el tipo penal –particularmente en el numeral 2° del citado artículo 416 bis del Código de Justicia Militar- exige que *“las lesiones produjeran al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días”*, circunstancia que, en lo atinente al concepto volitivo inherente a esa situación no fue satisfecha en la sentencia que se revisa.

**Tercero:** Que, en virtud de lo anterior, habida consideración que la sentencia ha incurrido en el vicio de haber omitido fundamentar debidamente la falta de tipicidad subjetiva, alegada oportunamente



por la defensa, incurriendo con ello en la causal del artículo 374 letra e), en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal, se acogerá la causal principal alegada por la defensa, en la forma que se indicará en lo resolutivo.

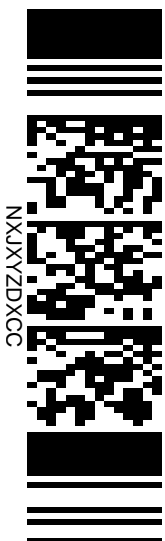
**Cuarto:** Consecuencia de lo anterior, al acogerse el motivo principal de nulidad, se torna inoficioso ponderar el subsidiario, por lo que se omitirá pronunciamiento a ese respecto.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 297, 342 letra c), 374 letra e), 384 y 386 del Código Procesal Penal, se **acoge** el recurso de nulidad interpuesto por el defensor penal público Herman Apablaza Cruz, en representación del imputado Felipe Hernán Leyton Muñoz, y, en consecuencia, se **invalida**, tanto el juicio oral celebrado el catorce de febrero último, como la sentencia de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, recaída en la causa RIT N° O-51-2020 del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, debiendo realizarse un nuevo juicio oral y dictarse una nueva sentencia, ante un Tribunal no inhabilitado, en la fecha que se fije al efecto.

Acordado lo anterior, con el voto en contra del ministro Tomás Gray, quien estuvo por rechazar el recurso deducido, sobre la base de las siguientes consideraciones:

1º) Que en lo atinente a la primera causal impetrada por la defensa, esto es la contemplada en el artículo 374 letra e), en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal, la sentencia recurrida desarrolla en los motivos octavo a undécimo los fundamentos por los cuales, en virtud de la prueba rendida, que fue valorada con libertad, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, se tuvo por establecido el hecho punible, descrito en el motivo sexto del fallo recurrido.

Asimismo, en el motivo octavo el Tribunal de Juicio Oral analiza la prueba vertida en juicio, valorando en particular la opinión de la perito legista del Servicio Médico Legal, Dra. Patricia Angel López, quien explicó las razones por lo cual las lesiones causadas deben ser consideradas como graves, esto es superiores a treinta días, pese al



informe de urgencia preliminar que le dio otro pronóstico. Lo mismo señaló el médico cirujano De la Cuadra, quien reafirmó que las lesiones debían ser consideradas como graves, pues las lesiones experimentaron como periodo de sanación entre 30 y 35 días, con igual tiempo de incapacidad. Lo anterior es relevante para encuadrar las lesiones causadas al carabinero que se encontrare en funciones, dentro del N° 2 del artículo 416 bis del Código de Justicia Militar.

Cabe considerar, además, que la falta de tipicidad subjetiva que se formula al sentenciado, en cuanto a sostener que las lesiones causadas al ofendido deben ser consideradas como menos graves, por lo cual deberían estar incluidas en el numeral 3° del citado artículo 416 bis y no en el citado N° 2 de dicho precepto, fundado en el referido certificado de atención de urgencia inicial y en que la infección posterior de la lesión no puede ser atribuida al justiciable, pugna con los dichos de la perito legista Dra. Angel, quien sostuvo, por un lado, que la mordedura al brazo del policía *“comprometió capas profundas de su antebrazo, según explicó la forense, lo que denota que buscó causarle el mayor daño posible con miras a escapar de quien pretendía su captura, sin que exista antecedente alguna que lleve a estimar que solo buscó ocasionarle lesiones de menor entidad”*, unido a que la mordedura humana genera un riesgo de infección con un grado de probabilidad cercano al 10 %, factor que no fue omitido por el profesional de turno que atendió a la víctima de urgencia, desde que en el mismo certificado de urgencia emitido por ese profesional, recomendó que la víctima se atendiera con un médico infectólogo, lo que demuestra que esa variante era esperable desde el primer momento.

De esta forma, esta voz discrepante considera que el recurrente se dedica más bien a divergir del raciocinio valorativo desplegado por los sentenciadores en el fallo aludido, en los aludidos considerandos octavo y duodécimo, pero en caso alguno hay falta de fundamento en la sentencia en cuanto a los puntos que aborda el recurso, toda vez que se comprobó que la lesión sufrida por el funcionario policial agredido duró más de 30 días y que el imputado no podía menos que saber que -a raíz de su acción maltratadora-



podía generar ese periodo de incapacidad en la víctima, sobre todo si la infección producida en el brazo del ofendido era al menos probable, como efectivamente aconteció en la especie.

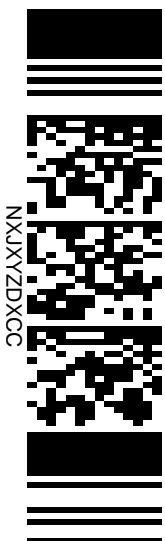
Por ende, solo puede concluirse que el hechor actuó a lo menos con dolo eventual, lo que descarta la existencia de un delito preterintencional, como lo insinúa la defensa, pues en rigor solo hubo una sola acción delictiva: morder en el brazo y lesionar deliberadamente a la víctima, dependiendo el periodo de incapacidad o de sanación de otros factores –como la infección- que eran previsibles desde el mismo día que ocurrió el delito.

Así las cosas, es dable considerar que la sentencia –en el motivo undécimo- sí abordó la tipicidad subjetiva, descartando la tesis de un eventual delito preterintencional, razón por la cual esa causal no puede ser acogida.

**2º)** Como causal subsidiaria, el recurrente alega la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es cuando en la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Precisa que el error de derecho se verifica al condenar el Tribunal Oral en Lo Penal por el delito contemplado en el artículo 416 bis N°2 del Código de Justicia Militar, en circunstancias, que lo que correspondía era considerar que se produjo en los hechos un delito preterintencional, aplicando por ello una sanción por el delito de lesiones menos graves del artículo 416 N°3 del Código de Justicia Militar en concurso con un cuasidelito del lesiones graves en concurso con lesiones graves previsto en el artículo 492. Luego, de esa forma, se le debería haber impuesto una sanción menos gravoso, como la contemplada en el artículo 416 bis N° 3, del citado cuerpo normativo, esto es la pena de tres años y un día, con derecho a una pena sustitutiva.

**3º)** En lo que respecta al motivo subsidiario de nulidad, teniendo únicamente presente este disidente que el hecho que se dio por establecido en el motivo sexto del fallo impugnado, señala -en lo pertinente- que la lesión causada a la víctima, consistente en *“mordedura humana en el antebrazo derecho, tardó en sanar más de*



*treinta días, con igual tiempo de incapacidad,”* aquello basta para refutar esta causal subsidiaria, pues toda la elaboración argumentativa de la defensa omite considerar esa circunstancia fáctica descrita en el hecho que se dio por establecido en la sentencia, la que es determinante para arribar a la convicción que el delito que se tuvo por acreditado en la especie es precisamente el contemplado en el artículo 416 bis N° 2 del Código de Justicia Militar, esto es herir, golpear o maltratar de obra a carabinero en ejercicio de sus funciones, causando lesiones que produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.

Más aun, en parte alguna la descripción fáctica antes citada alude a una eventual preterintencionalidad o describe las lesiones con rango de mediana gravedad -como arguye erradamente la defensa- supuestos que impiden construir un eventual error de derecho como ese interviniente pretende, pues si se esgrime este capítulo de invalidación, las premisas fácticas que se han dado por establecidas son inamovibles.

4º) Que, en consecuencia, para esta voz disidente, ambas causales del recurso deben ser desestimadas, por clara falta de fundamento, razón por lo que el arbitrio no puede prosperar.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Penal-893-2022.

Pronunciada por la Novena de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quitral e integrada, además, por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la ministra (s) señora Isabel Margarita Zúñiga Alvayay. No firman las ministras señoras Gómez Quitral y Zúñiga Alvayay, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia y por haber terminado su suplencia en esta Corte.

En Santiago, dieciocho de abril de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.





Proveído por el Señor Presidente de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a dieciocho de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>